

Contadora: ¿“impasse” o agotamiento?

MARÍA EMILIA PAZ SALINAS

A dos años de celebrarse la fundación del Grupo Contadora integrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela, el diálogo encaminado a propiciar una paz estable y duradera en el istmo centroamericano parece encontrarse estancado, muy a pesar de los esfuerzos realizados.

Resulta por lo tanto necesario analizar algunos elementos que pudieran arrojar luz sobre las causas del *impasse* registrado en los últimos meses, máxime cuando tan sólo en septiembre de 1984 parecía vislumbrarse el final del túnel, mediante la aparente aceptación de las cláusulas contenidas en la versión revisada del Acta de Contadora, por parte de las cinco naciones centroamericanas.

Uno de los aspectos que de inmediato salta a la vista es el hecho de que a pesar del realismo y la cordura que ha predominado en las negociaciones del Grupo Contadora, se haya albergado un falso optimismo respecto al papel que Estados Unidos jugarían en el proceso, o más bien en la creencia de que éstos se abstendrían de influir en las decisiones de sus aliados centroamericanos, lo cual constituye hoy en día uno de los grandes errores tácticos de los negociadores. Sin querer decir con ello que cualquier resolución negociada para Centroamérica debe contar con la anuencia del vecino país del norte, ni que el Grupo Contadora carezca de legitimidad sin la participación de Estados Unidos, el haber analizado detenidamente lo que el conflicto centroamericano representa para Estados Unidos en su conjunto y para los distintos grupos y tendencias que conforman la sociedad norteamericana y el Estado, hubiera podido predecir algunas de las relaciones que se han presentado y con ello obviado muchos problemas cuya solución parece complicarse al paso de los días.

El encajonar por otra parte a la problemática centroamericana dentro de un ámbito geográfico regional y exclusivo, constituye asimismo una cortapisa que impide valorar con justeza y realismo la influencia que ejerce el ámbito internacional en su conjunto, así como las luchas que se dan entre los distintos bloques de poder sobre situaciones y coyunturas determinadas, haciendo de éstas problemáticas supranacionales y aun suprahemisféricas. Si bien es un hecho indiscutible que los conflictos existentes en el seno de las distintas naciones centroamericanas se encuentran enrai-

zados en profundas contradicciones de índole económica y social, las cuales se traducen en el ámbito político, no es menos cierto que hoy en día la crisis que afecta al istmo a nivel global, está de lleno inserta en el conflicto Este-Oeste. La aceptación de esta última premisa no implica necesariamente la negación de la primera. Ambas variantes se encuentran estrechamente vinculadas y por ende requieren de un análisis paralelo, no como polos opuestos, sino como caras distintas de una misma problemática.

EL COMPROMISO NEOCONSERVADOR DE LA ADMINISTRACIÓN REAGAN

Captar cabalmente la posición de Estados Unidos en lo relativo al conflicto centroamericano, requiere tener en cuenta la importancia que para el presidente Reagan ha tenido siempre, mantener una imagen que refleje el poderío de Estados Unidos en el exterior, en contraposición a lo acaecido durante la administración Carter.

No es por tanto fortuito que el triunfo de Reagan en las elecciones de 1980 quedase inscrito en el panorama revanchista de una sociedad cuyo orgullo había quedado profundamente humillado desde la derrota de Vietnam, alcanzando sus niveles más bajos con la ocupación de la embajada norteamericana en Teherán, lo cual vino a sumarse a los reveses sufridos en materia de política exterior durante el año de 1979 en lo relativo al triunfo de la Revolución sandinista en Nicaragua, la instauración de un régimen de orientación socialista en la isla de Granada, y finalmente por el golpe representado por la invasión soviética de Afganistán. En materia de política exterior privaría por tanto desde el inicio de la administración Reagan la idea de reivindicar a Estados Unidos a los ojos del mundo, lo cual explica la línea dura asumida tanto por la Casa Blanca como por el Departamento de Estado liderado en un primer momento por el general Alexander Haig. La reconquista de la imagen de superpotencia no podía quedar desprovista de un carácter épico agresivo, cuya última consumación requiere de un triunfo de carácter militar, lo cual se opone por principio a soluciones de carácter negociado que impliquen la subordinación del interés prioritario.

El triunfo del republicano Reagan, representaría por otra parte, la derrota del liberalismo y la entronización de una nueva derecha, corriente neoconservadora a ultranza.¹ En materia de política exterior, dicha corrien-

¹ La consolidación del apoyo popular prestado al candidato republicano en las elecciones de 1980, se encuentra íntimamente vinculado al énfasis que dicho candidato pondría en los aspectos culturales y familiares. Para un estudio teórico de la corriente neoconservadora, véase Alan Wolfe, "Sociology, Liberalism and the Radical Right" y Davis Mike, "The new right road to power", en *New Left Review*, Londres, julio-agosto de 1981, núm. 128. Atilio Borón, "La crisis norteamericana y la racionalidad neoconservadora", en *Cuadernos Semestrales. Estados Unidos. Perspectiva Latinoamericana*, México, CIDE, 1er. semestre de 1981, núm. 9, pp. 31-58.

te estaría representada por Jeanne Kirkpatrick, quien con su artículo titulado “Dictatorships and Double Standards” publicado por la revista *Commentary* a finales de 1979, se ganaría no sólo el aplauso de Ronald Reagan sino su futuro nombramiento como representante de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas. Teniendo como palestra dicho foro, Kirkpatrick ejercería una influencia decisiva en la formulación de la política exterior de Estados Unidos, con un énfasis muy particular en Latinoamérica, región en la que se consideraba experta. En el artículo antes mencionado, Kirkpatrick establecía la diferencia existente entre los dictadores tradicionales al estilo del Shah de Irán y de Somoza en Nicaragua, quienes a su juicio ofrecían a su pueblo la esperanza de una democratización gradual (justificando implícitamente con ello el apoyo norteamericano) y las dictaduras totalitarias (comunistas), quienes negaban dicha alternativa. La aprobación de unos y la censura de otros quedaba por tanto legitimada. Reagan haría suyas las ideas de Kirkpatrick, quien más adelante y una vez en su puesto expresaría su desdén con respecto a la política de *Détente*, por considerarla un medio ineficaz para frenar el afán expansionista de la Unión Soviética, lo cual se traduciría en un cambio en la estrategia global de Estados Unidos, orientándose hacia una frenética carrera armamentista. A nivel hemisférico, dicho viraje tendría su manifestación concreta en la región centroamericana y en la cuenca del Caribe, en donde se pondría en práctica una política de confrontación, teñida de anticomunismo exacerbado. Según la opinión de la propia Kirkpatrick, “la política implementada hasta entonces había probado su incapacidad para hacer frente al problema de la expansión soviética-cubana en el área, contribuyendo definitivamente a ella, así como a la alineación de importantes naciones, al aumento del neutralismo, a la desestabilización de gobiernos amigos, al esparcimiento de la influencia cubana, así como al declive de la influencia norteamericana en la región”. (Finger, 1983-84: 456-457.)

La política del presidente Reagan con respecto a Centroamérica, quedaría por tanto inscrita desde los inicios de su administración en el marco del enfrentamiento bipolar, lo cual le serviría para justificar sus acciones. Partiendo del postulado expresado por Reagan en su campaña electoral, y reafirmado posteriormente en numerosas ocasiones, en el sentido de que la Unión Soviética era la principal instigadora del malestar existente en el mundo, por encontrarse inmersa en el “juego de dominó”, creando diversos puntos de ebullición (*hot spots*), resultaba lógico que la política que Estados Unidos habría de seguir en lo que ellos consideraban su patio trasero, tendería a marcar un alto a ese supuesto afán expansionista. La defensa de los derechos humanos, cedería por tanto su lugar a la lucha contra lo que la nueva administración denominaría la lucha contra el “terrorismo internacional”,² considerándose a Moscú como máximo responsable. Que-

² Apenas llegado Reagan a la presidencia reestablecería contacto con los regímenes

daba con ello abierta una nueva época en la cual los fines justificarían los medios utilizados, aun cuando éstos violasen las normas más elementales del derecho internacional.

Siguiendo los planteamientos de Kirkpatrick, la política hacia Latinoamérica durante la primera administración Reagan se orientaría a favorecer a los regímenes "amigos" aun cuando éstos fuesen claramente dictatoriales. Por otra parte se trataría a toda costa de desprestigiar a Cuba, Nicaragua y Granada. En líneas generales, dicha política encontraría una versión articulada a través de tres documentos, cuyo contenido se traduciría muy pronto en actos concretos como se verá más adelante.

El primero de éstos lo era el preparado por el Consejo de Seguridad Interamericano (Council for Inter-American Security) titulado "Una nueva política interamericana para los ochentas" (A new Inter-American Policy for the Eighties) y el cual partía del postulado de que las Américas se encontraban seriamente amenazadas, señalando: "Latinoamérica, el aliado tradicional de los Estados Unidos está siendo penetrada por la potencia soviética". Dicho documento señalaba a la región del Caribe como el núcleo de acción del expansionismo soviético. La principal recomendación expresada era la necesidad de revitalizar el Tratado de Río, en el sentido de consolidar una alianza hemisférica anticomunista. Se enfatizaba asimismo la necesidad de incrementar la ayuda y la asistencia militar a los países "amigos". Por otra parte, el Consejo de Seguridad proponía incrementar las presiones contra Cuba, llegando al grado de señalar que en caso de que la propaganda anti Cuba fracasara debería propiciarse el lanzamiento de una "guerra de liberación nacional" contra la isla, a fin de obligar al régimen de Castro a cambiar su política de alianza con Moscú. (*Los Angeles Times*: 15-enero-1981.)

Un segundo documento, cuyo contenido revelaba asimismo algunas de las líneas que seguiría la administración Reagan en materia de política exterior, lo sería el de la Fundación Heritage con el sugestivo título de "Mandato para el liderazgo" (Mandato for Leadership), en el cual se hacía un llamado a la suspensión de la ayuda económica a Nicaragua. La Fundación Heritage iba sin embargo más allá, recomendando abiertamente el derrocamiento del régimen sandinista.

Finalmente, el libro del ex presidente Richard Nixon, titulado *The Real War*, contenía asimismo algunas ideas en materia de política exterior. En su capítulo "El punto vulnerable" (The soft underbelly) Nixon apuntaba que Latinoamérica era una zona de importancia capital para los soviéticos: por sus recursos naturales, su población y su cercanía con Estados Unidos, señalándose el peligro extremo que representaría la instauración de un régimen aliado a la Unión Soviética en Centroamérica, siendo que el Hemisferio Occidental quedaría cercenado en esta "delgada cintura",

militares de Chile, Argentina y Bolivia, reanudando subsecuentemente la ayuda militar a Pinochet.

amenazando con ello a los mayores productores de petróleo en la zona: Venezuela y México, así como también la seguridad del Canal de Panamá. Nixon concluía que Estados Unidos no podía permitir de ninguna manera que esto sucediera, por lo que proponía a los estrategas de la administración Reagan ir más allá de las protestas diplomáticas para poder hacer frente con efectividad a la agresividad soviética. Para Nixon Estados Unidos se encontraba ya de lleno inmerso en una guerra, en la cual la victoria no podía tener sustituto. (*Ibid.*)

Tanto las ideas expresadas por los distintos grupos de asesores como las del ex presidente Nixon concordaban con la visión del mundo que tenía la nueva administración liderada por Reagan.

El análisis concreto de los hechos que antecedieron a la integración del Grupo Contadora, así como aquellos que le precedieron, nos permite demostrar con objetividad la forma en que éstos fueron quedando inscritos en el marco del planteamiento conceptual anteriormente expresado, presentando no sólo una gran coherencia, sino una continuidad tal que no deja lugar a dudas respecto a cuál había sido y continuaría siendo el objetivo primordial de la administración Reagan en lo relativo a Centroamérica. Las posiciones de Contadora y las de dicha administración se encontraban contrapuestas desde el inicio de las negociaciones del grupo. El error de los negociadores lo constituyó el no haber sabido sopesar el lenguaje de los hechos en contraposición al discurso meramente retórico.

1981-1983

El período comprendido entre enero de 1981 y enero de 1983, fecha en que se integra formalmente el Grupo Contadora, se caracteriza por un lado a nivel regional, por la exacerbación de las contradicciones económicas y sociales en los países centroamericanos (Black, 1982), aunado todo ello a la violencia política existente en el seno de algunas sociedades como la salvadoreña y la guatemalteca. Por otra parte, dicho período coincide con los dos primeros años de la administración Reagan, quien integrará a la región centroamericana en el marco de la confrontación bipolar, quedando por ende su política exterior hacia esos países, definida dentro del parámetro de su propia seguridad, lo que justificaría no sólo la rudeza del lenguaje utilizado sino una gama de acciones de distinta naturaleza destinadas a garantizar la misma.

El secretario de Estado, Alexander Haig, hacía referencia a una supuesta lista de prioridades “hit list”. Según su opinión, la paz mundial se encontraba seriamente amenazada por el activismo soviético. En Centroamérica, la Unión Soviética actuaba de acuerdo a una política muy bien definida, la cual comprendía cuatro fases: la primera de ellas había sido ya consolidada mediante el derrocamiento de Somoza y la instauración del régimen sandi-

nista en Nicaragua. Las siguientes lo eran la toma de El Salvador, Honduras y Guatemala, con lo cual la Unión Soviética consolidaría su poderío en el Hemisferio Occidental. (*New York Times*: 19-marzo-1981.) Partiendo de este criterio, la línea de acción asumida desde el principio fue la línea dura. El tono amenazante del discurso oficial iría *in crescendo* al paso que dicha administración se consolidaba en el poder, llegando a su punto más álgido durante los primeros meses de 1982. El conflicto bélico entre Argentina y la Gran Bretaña en el Atlántico del Sur marcaría entre abril y junio un compás de silencio en la discusión sobre Centroamérica, desviando la atención de la opinión pública hacia la contienda por las Islas Malvinas. La postura pro británica asumida por Estados Unidos durante la misma, así como el repudio del bloque latinoamericano en su conjunto a dicha actitud, jugaría un papel determinante en el cambio registrado en la retórica oficial a partir de junio de 1982, aunado al nombramiento de George Shultz como secretario de Estado a raíz de la renuncia de Haig el 25 de dicho mes.

Cabe señalar, sin embargo, que si bien durante los seis meses que precedieron a la integración del Grupo Contadora fue posible constatar un cambio positivo en el discurso, el cual parecía predecir un cambio de actitud en relación con Centroamérica, la política de la administración Reagan continuaría siendo la misma, pudiéndose resumir en los siguientes puntos:

- 1) Evitar el triunfo de la guerrilla salvadoreña;
- 2) Aislar a Nicaragua y en la medida de lo posible propiciar el derrocamiento del régimen sandinista;
- 3) Continuar hostigando a Cuba para disuadirla de prestar su apoyo a la guerrilla en Centroamérica.

a) *La política de "ayuda a los amigos": el caso de El Salvador*

El Salvador se constituyó desde el mero comienzo de la administración Reagan en su carta de juego. Partiendo del postulado de que bajo ninguna circunstancia se dejaría caer al gobierno salvadoreño en manos de la guerrilla, Reagan lo apostaría todo a ganar. Su llegada a la Casa Blanca coincidiría por otra parte con el lanzamiento de la "ofensiva final" por la guerrilla salvadoreña en enero de 1981, lo cual se adecuaría maravillosamente a su estrategia general, siendo que dicha ofensiva —aunque fracasada— justificaría la decisión presidencial en el sentido de brindar un apoyo más decidido a la Junta Salvadoreña encabezada por José Napoleón Duarte, incluyendo el envío masivo de armamento considerado letal,³ siendo que se trataba de frenar el expansionismo soviético-cubano en el área.

³ La ayuda militar fue temporalmente suspendida el 5 de diciembre de 1980 a raíz del asesinato de un grupo de religiosas norteamericanas. El 17 de enero, Carter reinició su ayuda a la Junta, la cual fue reforzada en proporciones masivas por la nueva administración. (*Washington Post*, 25 de enero de 1981.)

Según la opinión expresada por el secretario de Estado Alexander Haig, ante representantes de los países miembros de la OTAN, la decisión de su gobierno de apoyar militarmente a la Junta Salvadoreña obedecía a la necesidad de hacer frente a una campaña muy bien orquestada por parte del “comunismo internacional”, diseñada a transformar la crisis interna que vivía El Salvador en una confrontación internacional, insistiendo en que el bloque soviético, Vietnam, Etiopía y un grupo de árabes radicales (Libia) proporcionaban armamento a la insurgencia salvadoreña. En aquella ocasión, Haig declaró a los aliados europeos que el gobierno norteamericano no se mantendría pasivo frente a la amenaza soviética. La administración Reagan se comprometía a seguir apoyando al gobierno salvadoreño, lo cual equivalía a brindar la ayuda necesaria a fin de acabar con la “subversión comunista”. (*New York Times*: 21-febrero-1981.)

En apoyo a sus acusaciones y buscando legitimar su acción bélica, las autoridades norteamericanas harían públicos una serie de documentos, supuestamente capturados a la guerrilla salvadoreña, en los cuales se trataba de exponer a los países socialistas y particularmente a Cuba y Nicaragua, como responsables del tráfico de armamentos en el área. La veracidad de dichas fuentes fue posteriormente cuestionada. (*Wall Street Journal*: 8-junio-1981; *Washington Post*: 19-agosto-1981.)

La justificación ideológica de la política reaganiana encontraría articulación en una idea expresada posteriormente por la embajadora Kirkpatrick, en el sentido de que toda acción tendiente a garantizar la permanencia o el establecimiento de regímenes “liberales” era válida y legítima, concluyendo por otra parte, que el poderío norteamericano era necesario para la supervivencia de la “democracia liberal”. Kirkpatrick era de la creencia de que la ayuda militar y las acciones belicistas de Estados Unidos estaban plenamente justificadas. (*New York Times*: 8-marzo-1981.) Ello se traduciría en un aumento masivo de la ayuda militar a El Salvador. En 1978 la ayuda económica de Estados Unidos a El Salvador era de 10 millones de dólares. Para 1981 ésta ascendía a 136 millones con un alto porcentaje militar. (*Washington Post*, 19-agosto-1981.)

A todo lo largo de 1981, la administración Reagan insistiría en que los sucesos de El Salvador revelaban la injerencia soviética. El Salvador era parte del “problema global”, al cual Estados Unidos no podía sino dar una respuesta militar. La llamada “amenaza soviética” determinaría por lo tanto la política a seguir. (*New York Times*: 19-marzo-1981.)

No es de extrañar por lo tanto, que a pesar de existir evidencias en el sentido de que el envío de armamentos a El Salvador por parte de Cuba había cesado desde principios de 1981, como el propio enviado norteamericano a la isla lo señala (Smith, 1982: 57-174 y 181), la ayuda bélica a la Junta Salvadoreña continuaría. Más aún, según fuentes oficiales norteamericanas, desde principios de junio de 1981, el secretario de Estado Alexander Haig, así como el asesor en materia de seguridad Robert Mc. Farlane

presionarían al Departamento de Defensa a fin de que éste examinara una serie de opciones para una posible intervención militar en El Salvador, o bien contra Cuba o Nicaragua.

Ante el fracaso del gobierno salvadoreño frente a las fuerzas insurgentes, Haig insistiría en adoptar una acción más decisiva. Pese a ello, el Pentágono se opondría a dicha iniciativa por considerar que el envío de tropas norteamericanas a Centroamérica o el Caribe enfrentaría la oposición del Congreso y la opinión pública en general. La posición del secretario de Defensa, Caspar Weinberger, era que las posibilidades de que una acción de tal naturaleza tuviera éxito en ese momento, eran mínimas. La oposición no sólo sería interna sino que Weinberger temía aún más la posible respuesta de la Unión Soviética, pudiendo retaliar en contra de Berlín Occidental o en el Golfo Pérsico, sin que Estados Unidos estuviera en posición de enfrentar dichos actos. (*New York Times*: 5-noviembre-1981.) Comenzaba a gestarse un antagonismo entre Haig y el secretario de Defensa.

Resulta preciso señalar que la política armamentista de la Casa Blanca y el Departamento de Estado encontraría desde un principio una fuerte oposición entre los círculos liberales de ambas cámaras así como entre elementos de la intelectualidad y la prensa. Así por ejemplo en un debate organizado en febrero de 1981 por una comisión bipartita del Congreso, encabezada por el senador demócrata por Michigan, Carl Levin, con la participación del entonces embajador en El Salvador Robert White, quedaría muy claro que la estrategia reaganiana en El Salvador no era apoyada unánimemente. En aquella ocasión el embajador White, quien muy pronto sería removido de su cargo, se declararía en abierta oposición al envío de armamentos al gobierno de El Salvador, por considerar que no era el momento de incentivar la solución militar sino de promover la solución política. White reconocía que a lo largo de treinta años Estados Unidos había contribuido a la destrucción de las instituciones políticas en El Salvador, existiendo una gran necesidad de reconstruirlas, lo cual no se lograría si se reforzaba al sector militar en detrimento del civil. En apoyo a su postura, White señaló a la Comisión que la Junta Salvadoreña había sido capaz de enfrentar con éxito la "ofensiva final" lanzada por la insurgencia en enero de 1981, sin contar con el apoyo del armamento norteamericano, por lo que no se justificaba el envío de los mismos. (*New York Times*: 8-marzo-1981.) Pese a ello la opinión de Reagan era distinta.

A finales de 1981 el Congreso trataría de condicionar la ayuda militar al régimen salvadoreño al respeto de los derechos humanos, para lo cual se requeriría que el presidente de Estados Unidos extendiese una constancia certificando que se había dado una mejora en ese sentido. (*Washington Post*: 25-septiembre-1981.) Los hechos demuestran, sin embargo, que a pesar del recrudescimiento de la situación en El Salvador, de la continua violación de los derechos ciudadanos, así como de la violencia ejercida en

forma sistemática en contra de la población civil, Reagan no tendría reparo en asegurar lo contrario a fin de dar cauce al desembolso de 26 millones de dólares en ayuda militar a El Salvador, propuesta para el año fiscal de 1982. (*Washington Post*: 29-enero-1982.) Días más tarde, y a pesar del escepticismo generado entre los miembros demócratas, Reagan informaría que su administración se disponía a enviar 55 millones de dólares adicionales en “ayuda militar de emergencia” para El Salvador, con lo cual el monto total ascendería a 81 millones de dólares, cifra que contrasta con los 35 millones del año anterior. (*Washington Post*: 2-febrero-1982.)

Por su parte, el secretario Haig continuaría insistiendo que el recortar el presupuesto militar a El Salvador sería un “golpe mortal” para el gobierno de El Salvador ya que la ayuda norteamericana no sólo constituía un apoyo material, sino más importante aún, un soporte político y psicológico (*Washington Post*: 11-marzo-1982.) Para entonces era muy claro que a pesar del envío masivo de armamento, el gobierno salvadoreño era incapaz de enfrentar con éxito el embate de la insurgencia, lo cual parecía indicar que el sector popular se alineaba a favor de esta última. Después de doce meses en el poder, la administración Reagan no podía aún vanagloriarse de haber “marcado el alto” a la “subversión comunista”. Pese a ello continuaría rechazando toda propuesta de negociación entre la Junta Salvadoreña y la oposición armada, promoviendo a cambio la celebración de elecciones, sin la participación de la insurgencia. (*New York Times*: 13-marzo-1982.) Contrario a lo esperado, la fuerza centrista, representada por los demócratas cristianos, no contó con suficiente apoyo en las elecciones realizadas en marzo de 1982, resultando victoriosa la derecha radical, quien designaría al empresario Álvaro Magaña como presidente.

A partir de entonces, si bien El Salvador continuaría siendo la carta mayor en el juego de la administración Reagan, la estrategia pasó a centrarse en el acoso a Cuba y particularmente a Nicaragua. Por otra parte Honduras se convertiría en el más importante bastión militar norteamericano en la zona.⁴

b) *El acoso a los enemigos: Cuba y Nicaragua*

La llegada de Reagan a la Casa Blanca no podía menos que presagiar malos augurios, tanto para Cuba como para Nicaragua. Ya desde su campaña electoral Reagan habría manifestado abiertamente su deseo de confrontar a Castro, a diferencia de la postura conciliadora de Jimmy Carter

⁴ En marzo de 1982 se calculaba que el número de asesores militares en Honduras superaba a los cien, a los cuales se sumaban 210 elementos de los Cuerpos de Paz. La ayuda militar para el año fiscal de 1982 fue de 10.65 millones, la cual en 1983 se incrementó sustancialmente.

al asumir la presidencia en 1976. De ahí que no fuese de extrañar la lluvia de amenazas desatada contra Cuba, quien sería acusada de ser trampolín desde el cual se canalizaba el armamento procedente del bloque soviético a la guerrilla centroamericana. Dicha situación cerraba de antemano toda posibilidad de distensión en las relaciones Estados Unidos-Cuba. En la primera comparecencia del secretario Haig ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, manifestaría que Estados Unidos no estaba dispuesto a reanudar relaciones diplomáticas con Cuba. (*Los Angeles Times*: 15-enero-1981.)

La guerra psicológica y la multiplicación de las amenazas registradas entre enero y noviembre de 1981 son indicio de que se seguía al pie de la letra la estrategia trazada por el Consejo de Seguridad Interamericano. La política anti Cuba estaba basada en lo que Kirkpatrick denominaría el "nuevo realismo" en función del cual, la administración era consciente de la importancia que el hemisferio occidental tenía para la propia seguridad de Estados Unidos. El "nuevo realismo" empujaba por lo tanto a la adopción de las medidas que fuesen necesarias para frenar el flujo de armamentos provenientes de Cuba y Nicaragua, medidas que no podían excluir la posibilidad militar. (*New York Times*: 20-marzo-1981.) Tanto para Kirkpatrick como para el secretario Haig, las palabras no eran suficientes, era necesario actuar. (*Manchester Guardian/Le Monde*: 30-agosto-1981.)

A medida que el gobierno de El Salvador mostraba su incapacidad para hacer frente con éxito a la guerrilla, a pesar de la ayuda masiva recibida de Estados Unidos, la administración Reagan intensificaría la guerra psicológica contra Cuba, como también lo haría contra Nicaragua, tratando por este medio de romper el *impasse* en que se encontraba enfrascada la lucha entre facciones en El Salvador. Pese a ello, las presiones sólo producirían el efecto contrario al deseado. Cuba no se dejaría intimidar por el tono del discurso reaganiano. Más aún, se fortalecería militarmente. Cuando en octubre de 1981, Haig señaló que existían evidencias plausibles de que una gran cantidad de armamento soviético estaba siendo introducido a Centroamérica a través de Cuba, y que en consecuencia Estados Unidos se disponía a adoptar las medidas necesarias para frenar tal flujo, se produciría tal movilización en Cuba, que Reagan, sorprendido de la reacción se vio obligado a declarar públicamente que Estados Unidos no tenía la intención de enviar tropas a ninguna parte del mundo. (Smith, 1982: 164.)

A pesar de ello la campaña anti Cuba continuó, ya que como lo expresó con anterioridad Kirkpatrick, Washington tenía que recurrir a todos los recursos posibles para convencer al resto de las naciones del hemisferio de las intenciones de Castro, esto es, subvertir a toda el área. (*Manchester Guardian/Le Monde*: 30-agosto-1981.) A finales de noviembre de 1981, el secretario de Estado, Alexander Haig señalaba que Cuba tenía distribuidos en el mundo entre cuarenta y cincuenta mil mercenarios, quienes repre-

sentaban una amenaza para la paz y la seguridad mundial. (*Washington Post*: 29-noviembre-1981.) En su discurso pronunciado ante los miembros de la Organización de Estados Americanos, reunidos en la isla de Santa Lucía a principios de diciembre, Haig acusaría a Cuba de intervenir en los asuntos internos de las naciones del hemisferio:

A partir de 1978, y con el apoyo de la Unión Soviética, Cuba se ha embarcado en una campaña de interferencia sistemática en contra de sus vecinos. Ya ni siquiera pretende respetar la soberanía de otras naciones, abiertamente La Habana hace llamados a fin de lograr la unidad de los líderes de la oposición violenta, promoviendo pactos entre ellos; entrena a sus hombres y les proporciona armas para luego enviarlos de regreso a implementar alternativas violentas contra los gobiernos legítimos. El resultado de ello ha sido el sembrar terror entre los inocentes. Presenciamos dicho esquema en El Salvador, Guatemala y ahora Colombia. (*New York Times*: 5-diciembre-1981.)

Esta misma idea sería expresada por el propio Reagan —prácticamente con las mismas palabras— dos meses más tarde y ante el mismo foro, al presentar su Programa de Ayuda para el Caribe. (*New York Times*: 25-febrero-1982.)

Como ya ha sido señalado, la justificación de la belicosidad de Reagan estaba dada en función de la confrontación existente con la Unión Soviética. Según la versión del Departamento de Estado, esta última había hecho caso omiso al llamado de Reagan en el sentido de establecer unas relaciones constructivas, fomentando contrariamente la violencia. De acuerdo al testimonio de Haig, presentado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Cuba constituía una amenaza, siendo que en los últimos meses había ampliado sistemáticamente su capacidad militar ofensiva, muestra de lo cual era la llegada de un segundo escuadrón de aviones MIG 23 así como las 63 000 toneladas de material de guerra importados durante el año de 1981, armamento que vino a sumarse a la capacidad militar ya existente y de por sí la mayor en la zona. (*New York Times*: 3-febrero-1982.) Una vez más Haig presionaría a favor de medidas de carácter militar, pese a lo cual, tanto Weinberger como el secretario de la Marina J. F. Lehman se opondrían a ello. Según la opinión de Lehman, la armada no podía concebir que un conflicto naval que implicara a fuerzas soviéticas pudiera tener un carácter exclusivamente regional. Éste se convertiría instantáneamente en un conflicto global. (*Los Angeles Times*: 12-marzo-1982.) El bloqueo a la isla quedaba por tanto descartado. Ante el fracaso de la guerra psicológica contra Cuba, y ante la imposibilidad de implementar medidas de carácter radical con el apoyo del ejército y la armada norteamericana en contra de Cuba, la estrategia de la administración pasaría a centrarse en las acciones encubiertas en contra de Nicaragua, precedidas de presiones económicas y psicológicas, acompañadas de una vasta campaña de desprestigio a nivel internacional en contra del régimen sandinista.

El patrón del acoso a Nicaragua sería muy similar al adoptado en contra de Cuba, siendo que la Junta Nicaragüense no contaba con el beneplácito de Washington. Más aún, el secretario Haig había manifestado públicamente que él consideraba un gran error de la administración Carter el haber negado ayuda al general Somoza a fin de evitar su derrocamiento, siendo que de no haberse presionado al dictador para abandonar el país, "Nicaragua y sus vecinos no enfrentarían hoy en día la amenaza comunista". (*Los Angeles Times*: 15-enero-1981.) De ahí que no fuese de extrañar que uno de los primeros actos de la administración Reagan en materia de política exterior, lo fuese la suspensión de la ayuda económica a Nicaragua (luego del derrocamiento de Somoza se acordó una ayuda a Nicaragua de 138 millones de dólares), acusando a ésta de proveer de armamento a la guerrilla salvadoreña. Dada la fragilidad de la estructura económica de la nación nicaragüense, se pensó en un primer momento que dicha medida sería suficiente para desarticular al régimen de Managua, lo cual sin embargo no aconteció.

La guerra psicológica desatada contra Nicaragua corría paralela a la que se libraba contra Cuba. Sin embargo, en el caso de la primera se procedería a la implementación de acciones encubiertas. Así, en noviembre de 1981, el propio secretario de Estado se negaría a rechazar el apoyo a las acciones tendientes a desestabilizar al gobierno sandinista (*New York Times*: 13-noviembre-1981), siendo que a su juicio "las horas eran cada vez más cortas para prevenir que Nicaragua, sometida al gobierno sandinista de izquierda, se convirtiera en un Estado totalitario como Cuba". (*New York Times*: 5-diciembre-1981.) Por otra parte, ya desde entonces se empezó a manejar la idea de que Nicaragua representaba una amenaza potencial para sus vecinos, siendo que ésta recibía armamento sofisticado por parte de Cuba, el cual podía llegar a incluir en un futuro cercano aviones MIG soviéticos. (*Miami Herald*: 25-noviembre-1981.)

En su discurso ante el pleno de la Organización de Estados Americanos, y luego de fustigar severamente a Cuba, el secretario Haig ahondaría en la cuestión del armamento y en el carácter represivo del régimen sandinista. Haig señaló que el contingente militar del nuevo régimen nicaragüense era tres veces mayor que el que en su momento poseía Somoza. Más aún, Nicaragua tenía intenciones de crear el mayor ejército de la región, para lo cual se valía ya de 1 500 asesores militares cubanos. Por otra parte, armamento pesado y sofisticado estaba siendo introducido por vez primera en la región. La administración Reagan acusaba a Nicaragua de violar el principio de no-intervención, proporcionando armas a la insurgencia salvadoreña, concluyendo que Estados Unidos estaba preparado para secundar a otros estados contra la agresión nicaragüense, para hacer lo que fuera "prudente y necesario para prevenir que una nación en Centroamérica se convierta en plataforma del terror y de guerra en la región". (*New York Times*: 5-diciembre-1981.) Si bien Haig insistiría en que Estados Unidos

no tenía planes de enviar tropas de combate a Centroamérica, dejaría muy claro que esta nación estaba dispuesta a proporcionar ayuda económica y asistencia militar a las naciones que lo necesitaran.

Como ya ha sido señalado, en la medida en que la estrategia trazada para El Salvador no daba muestras de avance en el logro de su objetivo primordial, el lenguaje en contra de Cuba y Nicaragua se tornaría más duro, comenzándose a hablar, incluso, de la implementación de "planes de contingencia", entre los cuales se encontraba el bloqueo a Nicaragua (*New York Times*: 6-noviembre-1981), lo cual sin embargo no se dio por no contar con la anuencia de la armada, tal como aconteció en el caso de Cuba. Reagan sin embargo, no tendría impedimento en apoyar acciones encubiertas en contra de Nicaragua. Según información filtrada a los medios informativos, a mediados de noviembre de 1981 en una reunión del Consejo de Seguridad, la CIA sometió a Reagan una propuesta, la cual fue apoyada por el secretario de Estado Alexander Haig y el secretario de Defensa Caspar Weinberger. (*Washington Post*: 20-marzo-1982.) Según fuentes oficiales, en aquella ocasión el director de la CIA, William J. Casey, solicitó a Reagan "apoyo para llevar a cabo operaciones políticas y paramilitares en contra de la presencia cubana y del apoyo de Cuba a los sandinistas". El monto de la operación ascendía a un total aproximado de 19 millones de dólares. Si bien el plan de la CIA no incluía el envío de elementos norteamericanos para la lucha en Centroamérica, acordaba la creación de fuerzas paramilitares, las cuales operarían desde puestos establecidos a lo largo de la frontera hondureña. Según los planes de la CIA, dichos comandos serían entrenados para sabotear puntos claves de la infraestructura nicaragüense, con el fin de causar estragos en la ya de por sí vapuleada economía nicaragüense, distrayendo recursos humanos de las actividades productivas. Asimismo, la CIA se proponía crear una fuerza de oposición con apoyo popular, la cual sería nacionalista, anti-cubana y anti-Somoza. Era claro que un tipo de acción de esta naturaleza atentaba contra las normas más elementales del derecho internacional, constituyéndose en una flagrante violación del principio de no-intervención por parte de la administración Reagan. Pese a ello, el primero de diciembre de 1981, este último firmaba un documento señalando la necesidad de implementar este tipo de acciones encubiertas en la región a fin de salvaguardar la seguridad de Estados Unidos. (*New York Times*: 14-marzo-1982.) Meses más tarde, la revista *Newsweek* publicaba un amplio reportaje, el cual confirmaba que la CIA había puesto en ejecución sus proyectos. (*Newsweek*: 1-noviembre-1982.)

Mientras tanto, al igual que en el caso de Cuba, Nicaragua con la mediación de México había venido tratando de entablar un diálogo directo con la administración Reagan. El 22 de febrero de 1982, Daniel Ortega, coordinador de la Junta Sandinista anunciaría públicamente que su gobierno estaba dispuesto a escuchar las propuestas de Washington, a lo cual

Estados Unidos respondió sometiendo a Nicaragua un listado de ocho puntos, los cuales incluían: El cese del apoyo a las fuerzas insurgentes en los países vecinos; la limitación de las fuerzas armadas en la región, incluyendo la prohibición de importar armamento pesado; reducción del número de asesores; la verificación de la cláusula anterior por observadores externos; la promesa por parte de Nicaragua, de respetar el pluralismo ideológico y la diversificación de la economía; una resolución mutua con Estados Unidos, comprometiéndose a no intervenir en los asuntos internos de otras naciones, a cambio de lo cual Estados Unidos se comprometería a no apoyar las actividades de los exiliados nicaragüenses destinadas a invadir Nicaragua, prometiendo asimismo perseguir este tipo de actividades; Estados Unidos reanudaría asimismo la ayuda económica a Nicaragua e implementarían una serie de medidas de intercambio. (*New York Times*: 15-abril-1982.)

Si bien era cierto que Nicaragua se mostraba dispuesta a negociar, rechazaría las propuestas norteamericanas, negándose a quedar subordinada a los designios de esta nación. A cambio proponía la firma de pactos de no agresión con las naciones vecinas, lo cual no era considerado suficiente por la administración Reagan. En una palabra, a mediados de abril de 1982 todo parecía indicar que las posibilidades de entendimiento entre estas dos naciones eran nulas.

La guerra en el Atlántico del Sur, desviaría temporalmente la atención de Centroamérica. Posteriormente las presiones del bloque latinoamericano en su conjunto a raíz del apoyo norteamericano a la Gran Bretaña, obligarían a la administración Reagan a adoptar una actitud más condescendiente. La llegada de Shultz al Departamento de Estado cambiaría la tónica del discurso, mas no su contenido. El nuevo secretario de Estado trataría de involucrar más activamente al resto de las naciones centroamericanas en su confrontación con Nicaragua, a través de lo cual se buscaría legitimar la intervención norteamericana en los asuntos de Centroamérica.

Si bien durante la segunda mitad de 1982, la administración Reagan dejaría entrever la posibilidad de negociar, lo cierto del caso era que no se estaba dispuesto a ceder un ápice con respecto a Cuba y Nicaragua, como lo demostró la llamada Resolución Symms, aprobada por el Senado en agosto de 1982, la cual ponía de manifiesto que Estados Unidos estaba determinado a "prevenir por cualquier medio que fuera necesario, incluyendo el uso de las armas, que el régimen marxista-leninista extienda por la fuerza o la amenaza sus actividades agresivas o subversivas a cualquier parte del hemisferio" así como a prevenir la creación de una fuerza de choque en Cuba, con el apoyo militar externo que pudiese poner en peligro la seguridad de Estados Unidos. (*Washington Post*: 12-agosto-1982.) El concepto de seguridad hemisférica cobraba nueva vida, y a él quedaría subordinada la política de la administración Reagan.

1983-1985

El período que va de enero de 1983 a nuestros días se encuentra íntimamente vinculado a la existencia del Grupo Contadora, cuya presencia marcará un hito en el debate centroamericano, abriendo posibilidades reales a una paz negociada en contraposición a una alternativa militar.

La presencia del Grupo abriría por otra parte la posibilidad de un acuerdo a nivel regional entre las cinco naciones centroamericanas, a la par que propondría un compromiso al cual los distintos países con intereses en el área deberían adherirse. Si bien las propuestas del Grupo estaban fincadas en posiciones realistas, definidas en función de la problemática política, económica y social, algunos factores de índole externa obstaculizarían el avance de las negociaciones tal y como ha quedado demostrado.

El análisis de los eventos acontecidos en el lapso de los últimos 24 meses, parece indicar que si bien la mera existencia del Grupo ha evitado la generalización del conflicto en la zona, no se ha logrado modificar la postura norteamericana, en lo relativo a la amenaza que Nicaragua representa tanto para sus vecinos como para su propia seguridad. Más aún, es posible observar que a medida que el Grupo intensificó sus contactos con las naciones centroamericanas, la campaña de fuerza en la zona aumentó asimismo sus proporciones. De ello se derivan varias interrogantes, entre otras, el porqué los negociadores de Contadora prefirieron ignorar el doble discurso de la administración Reagan.

La integración del Grupo Contadora puede ser considerado hoy en día como uno de los grandes aciertos en los anales de las relaciones de los países latinoamericanos, representando el triunfo del interés común sobre los intereses particulares, sin embargo su alcance es hoy en día cuestionable.

Si bien ya en 1981, tanto México como Venezuela parecían coincidir en que la crisis salvadoreña solamente podía ser resuelta mediante una solución política, en contraposición a la solución militar promovida por Reagan, parecía extremadamente difícil que ambas naciones pudiesen propiciar una iniciativa común, siendo que ideológicamente se encontraban separadas por un abismo.

México desde un principio reconoció la legalidad de las facciones opositoras en El Salvador, a cuyos representantes incluso abrió sus puertas; reconocimiento que por otra parte tendría un carácter más decidido a raíz del Comunicado franco-mexicano de finales de agosto de 1981, a través del cual los presidentes François Mitterrand y José López Portillo instaban a considerar a la guerrilla salvadoreña como “fuerzas políticas representativas”.

Venezuela por su parte, apoyaba a la Junta Salvadoreña encabezada por José Napoleón Duarte, amigo personal de Herrera Campins, por lo que rechazaría enfáticamente la propuesta franco-mexicana, llegando incluso a calificarla de “intervencionista”, respondiendo junto con Colombia con un bloqueo a la misma, llamado al que se unirían de inmediato la Repú-

blica Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, Honduras, y posteriormente Perú, Ecuador y Costa Rica. El Comunicado franco-mexicano tan sólo encontró el apoyo incondicional de Nicaragua, Panamá, Cuba y Noruega. (*Financial Times*: 2-septiembre-1981.)

México, sin embargo, no cejaría en su empeño de propiciar el diálogo pacificador; si bien en el caso de El Salvador no obtuvo el éxito deseado, continuaría en su afán de limar asperezas en el área. En febrero de 1982 y durante su visita a Managua, José López Portillo urgiría a iniciar negociaciones a fin de reducir las tensiones existentes en Centroamérica. En aquella ocasión, el presidente de México hablaría de la necesidad de llegar a un acuerdo entre las facciones contendientes en El Salvador, así como a reducir las tensiones existentes entre Estados Unidos, Cuba y Nicaragua, asegurando que en el caso de El Salvador, México estaría dispuesto a servir de garante a los intereses norteamericanos, instando con ello a Estados Unidos a apoyar las negociaciones.

El discurso de Reagan, pronunciado ante el Pleno de la Organización de Estados Americanos, al día siguiente del llamado de López Portillo, representó sin embargo una firme negativa. La belicosidad del mismo y los ataques verbales lanzados contra Cuba y Nicaragua eran muestra de que la administración Reagan no tomaba con seriedad la propuesta del mandatario mexicano, lo cual quedó comprobado un mes más tarde al serle sometidos a Reagan los detalles de la negociación, quien ignorándolos presentó a Nicaragua sus llamados ocho puntos, sabiendo de antemano que serían rechazados, lo cual sin embargo se adecuaba perfectamente a su estrategia. La propuesta mexicana encontró el decidido apoyo de 104 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. (*Washington Post*: 6-marzo-1983.)

Para septiembre de ese mismo año, México y Venezuela habían logrado superar sus diferencias ante la gravedad de la situación, formulando una iniciativa conjunta. Los presidentes de ambos países, José López Portillo y Luis Herrera Campins se dirigirían al presidente Reagan en carta fechada el 7 de ese mes exponiendo su preocupación respecto a las tensiones existentes en la región centroamericana, así como al peligro de una generalización del conflicto. En su comunicación a Reagan, los presidentes hacían mención explícita de las tensiones fronterizas entre Honduras y Nicaragua, así como a la confrontación entre Nicaragua y Estados Unidos, proponiendo a Reagan entablar el diálogo con Managua a fin de lograr una genuina negociación. Si bien en aquella ocasión Reagan pareció recibir la propuesta con simpatía, subsecuentes declaraciones del mandatario norteamericano revelarían que la aceptación de una propuesta no implicaba un compromiso. Así en la respuesta oficial a los mandatarios de México y Venezuela, Reagan señalaría que los problemas de Centroamérica deberían ser abordados dentro de un contexto regional, instando al pluralismo democrático, así como a poner fin al terrorismo por parte de "ciertas naciones". Reagan

señalaba asimismo que debía prohibirse la importación de armamento pesado en Centroamérica y reducirse el número de asesores foráneos. Cabe señalar que los puntos propuestos por Reagan eran los mismos que en abril de 1982 había formulado a Nicaragua.

Si bien la administración Reagan en ningún momento rechazó abiertamente las propuestas de negociación promovidas por México, ésta orientaría su estrategia desde un principio a crear alternativas paralelas, mediante las cuales se pretendía restar consenso a la iniciativa original. Así, en octubre de 1982, Costa Rica, secundada por Estados Unidos, convocaría a una reunión en San José, a la cual asistirían Belize, Colombia, El Salvador, Honduras y Jamaica, quienes suscribirían un documento en el cual si bien hacían un llamado a la democracia, incluían todas las demandas de Reagan, dando por resultado que Nicaragua quedaba excluida de las negociaciones.

Posteriormente México y Venezuela lograrían atraerse a Colombia e incluirían asimismo a Panamá en una iniciativa conjunta de mayor envergadura, quedando integrado formalmente el Grupo Contadora, el cual tomaría su nombre del sitio donde tuvo lugar la primera reunión de los integrantes del grupo en enero de 1983. En aquella ocasión se planteó la necesidad de buscar soluciones pacíficas en Centroamérica por medio del diálogo y la negociación, así como la necesidad de eliminar factores externos que agudizaban la situación y la obligación de no recurrir a la amenaza y al uso de la fuerza. La Carta de Contadora recomendaba asimismo la discusión entre las facciones que tomaban parte en El Salvador, así como una propuesta de retiro de todos los asesores militares en la zona, tanto norteamericanos como cubanos.

La propuesta de Contadora fue recibida por Washington con escepticismo. Si bien no fue rechazada en forma oficial por la administración Reagan, los eventos registrados a lo largo del año de 1983 revelan que la negociación y el diálogo pacificador nunca fue asumido con seriedad, aun cuando declaraciones de distintos funcionarios y del propio Reagan pudieran indicar lo contrario.

Los lineamientos de la política trazada a principios de 1981 continuaron vigentes, tan sólo pasó a ponerse mayor énfasis en el acoso a Nicaragua. A nivel de la estrategia, dicha política comprendería dos líneas paralelas de acción: por un lado la acción diplomática, supuestamente orientada a la negociación, por otra, la acción militar, cuyos efectos necesariamente contradecirían a la primera. En un documento presentado ante el Consejo Nacional de Seguridad en julio de 1983 quedaron plasmadas ambas líneas paralelas. (*New York Times*: 17-julio-1983.) Dicha contradicción no era del todo fortuita: a partir del momento en que se vio que el Grupo Contadora tenía un amplio respaldo internacional, se hizo preciso mantener la imagen que indicara la disposición de dialogar. Por otra parte había que mantener abierta una salida digna en caso de que la opción militar

fracasara, o bien que ésta se viese limitada por la acción de las propias fuerzas internas que se oponían a ella en el propio seno de Estados Unidos, siendo que la opinión pública comenzaba a mostrar su preocupación en el sentido de que la situación que parecía perfilarse en Centroamérica era similar a la que se había dado en Vietnam en el período inmediatamente anterior a la intervención norteamericana.

Así vemos que a lo largo de los meses que siguieron la constitución del Grupo Contadora y a la par que se multiplicaban las declaraciones de supuesta adhesión, se intensificaba la llamada "guerra secreta" en contra de Nicaragua mediante el apoyo a las fuerzas contrarrevolucionarias que luchaban desde Honduras y a las cuales Reagan designaba como "combatientes de la libertad" (*freedom fighters*). Así, en mayo de 1983 el Congreso (a pesar de la fuerte oposición en la Cámara de Representantes) aprobaba la continuación de las actividades encubiertas en Centroamérica, autorizando un gasto de 30 millones de dólares. (*New York Times*: 7-mayo-1983.) Aunado a ello, Reagan incrementaría las presiones económicas en contra de Nicaragua al suprimir las compras de azúcar a este país durante el mes de mayo (*Los Angeles Times*: 18-mayo-1983), y posteriormente bloquear un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. (*Washington Post*: 1-julio-1983.)

A principios de julio, en la reunión preparada por el Consejo Nacional de Seguridad, en un documento presentado a discusión, la Casa Blanca señalaba la necesidad de incrementar en un 40 por ciento la ayuda militar a los países aliados en Centroamérica, señalando que a pesar de lo crítico de la situación, todavía era posible defender los intereses de Estados Unidos sin el desembarco de tropas, aun cuando había que continuar manteniendo esta última alternativa para evitar una intervención abierta soviética-cubana. Otros aspectos considerados en el documento eran continuar con los proyectos de la CIA en el área.

Resulta por tanto altamente significativo el hecho de que los negociadores de Contadora no hayan sido capaces de sopesar con toda su crudeza el doble mensaje de la política de la administración Reagan. Según Sepúlveda en septiembre de 1983 (cuando se intensificó el bombardeo a las ciudades nicaragüenses) Estados Unidos estaba "llegando a un término de acuerdo con la postura mexicana respecto a Centroamérica". (*Excelsior*: 21-septiembre-1983.) Baste indicar que fue durante el mes de julio a raíz del encuentro de Cancún, cuando si bien Reagan parecía acoger con beneplácito las propuestas de los cuatro mandatarios latinoamericanos, éste adoptaba simultáneamente líneas de acción completamente opuestas al espíritu de la Declaración, tal fue el caso de la decisión de implementar maniobras militares en las costas centroamericanas, de magnitud hasta entonces nunca vistas, al tiempo que dejaba entrever la posibilidad de emprender una cuarentena naval en torno de Nicaragua. Aunado a todo ello, las declaraciones contundentes en el sentido de que a su juicio la violencia

en Centroamérica no desaparecería mientras el régimen sandinista continuase en el poder, con lo cual dejaba en claro que no estaba dispuesto a aceptar ninguna alternativa que implicara el respeto a la autodeterminación nicaragüense. El nombramiento de una comisión para definir la política a largo plazo con respecto a Centroamérica, la cual sería encabezada por Kissinger, cuya opinión respecto a la línea de acción a seguir era bien sabida, se inscribe dentro de este contexto. Kissinger consideraba que se tenía que lograr un firme control sobre Centroamérica, estando asimismo a favor de las operaciones encubiertas.

Haciendo caso omiso a las propuestas nicaragüenses, las cuales incluirían: 1) un pacto de no agresión con Honduras, 2) el fin del abastecimiento de armas a la guerrilla salvadoreña, 3) el abandono de la militarización del área, así como la supresión del uso de otras naciones para lanzar una agresión contra otro Estado, y 4) el compromiso de no instalar bases y de respetar la autodeterminación de todos los pueblos (*Washington Post*: 31-julio-1983), propuestas que por otra parte habían sido emitidas haciéndose eco de la Declaración de Cancún, Reagan intensificaría la ayuda a los contrarrevolucionarios, asesorados por la CIA, quienes durante los meses de septiembre y octubre emprenderían acciones sin paralelo como lo fueron el bombardeo a ciudades y puertos y el minado de los mismos, en flagrante violación de las leyes internacionales.

La invasión de Granada a finales de octubre planteó con crudeza la situación. Más que en ningún momento se manejaría la idea de la amenaza soviética por parte de la administración Reagan a fin de granjearse un amplio consenso interno, el cual por otra parte se logró, en gran parte, como resultado de la reciente tragedia experimentada en Líbano, donde un contingente de marines resultó víctima de una agresión terrorista. Así, en su discurso dando a conocer la invasión a Granada, Reagan señalaría que tanto en Líbano como en Granada, Moscú había instigado la violencia, por lo que el concepto de seguridad nacional no podía limitarse más a la defensa de las propias fronteras. No era secreto para nadie que Reagan considerara a Centroamérica como zona estratégica, la cual por ende debía ser resguardada de toda agresión. (*Washington Post*: 28-octubre-1983.) La psicosis de invasión a Nicaragua creció en proporciones desmesuradas. Jack Anderson en su columna publicada el 16 de noviembre, señalaba por ejemplo que existían evidencias alarmantes en el sentido de que la administración Reagan estaba pensando apoyar a ciertos países centroamericanos en su deseo de invadir a Nicaragua. (*Washington Post*: 16-noviembre-1983.) De hecho todos los reportes sobre Granada enfatizando la participación cubana parecían apuntar hacia cuál sería el destino de Nicaragua. Pese a ello, la unánime protesta de la opinión pública internacional, incluyendo la airada censura de la Gran Bretaña, su tradicional aliada, frenó toda posibilidad de una empresa similar en la zona, siendo que incluso el emplazamiento de misiles norteamericanos en Europa llegó a peligrar, al

preguntarse si era posible confiar en Reagan, quien era capaz de lanzar una agresión sin consultar. Si bien las naciones de la Comunidad Económica Europea habían manifestado desde el inicio de las negociaciones de Contadora su apoyo a las mismas, nunca hasta entonces se había escuchado la abierta censura a la política de Reagan en Centroamérica y el Caribe. En una entrevista concedida por el primer ministro de Gran Bretaña, ésta censuraría duramente a Reagan señalándole que no por no gustarle un gobierno tenía derecho a invadir a un país, aun cuando dicho régimen fuera comunista. (*Journal of Commerce*: 2-noviembre-1983.)

El año de 1983 cerró sin que de hecho la política de la administración Reagan hacia Centroamérica hubiera experimentado cambios sustantivos. Si bien la mera existencia de Contadora frenó la generalización del conflicto en el istmo, no logró modificar la línea de acción norteamericana; pese a ello los negociadores parecían no otorgarle a esto suficiente importancia. Así vemos que a principios de 1984, a la par que Reagan hacía expresas sus ideas con respecto a la importancia de Centroamérica y el Caribe en la seguridad de Estados Unidos, señalando simultáneamente que dicha nación no aceptaba la idea de que la libertad y el desarrollo eran incompatibles, ni que el desarrollo debía anteceder forzosamente a la libertad, condenándose a Cuba y a Nicaragua, los negociadores de Contadora se mostraban sumamente optimistas respecto al proceso de negociación, suponiendo que las cinco naciones centroamericanas se encontraban dispuestas a ratificar los 21 puntos de objetivos enunciados en septiembre pasado, comprometiéndose con ello al proceso pacificador, el cual no podía dejar de incluir el respeto hacia Nicaragua y su régimen. Más adelante el informe de la Comisión Kissinger confirmaría el hecho de que Estados Unidos y Contadora avanzaban por senderos distintos, los cuales por otra parte difícilmente podrían encontrarse siendo que partían de postulados totalmente disímiles. Contadora pretendía incluir a Nicaragua en el proceso negociador, mientras que Reagan pretendía lo opuesto: excluirla. Así Kissinger señalaba que Nicaragua representaba una amenaza para sus vecinos y para la seguridad de Estados Unidos, siendo que el establecimiento en Centroamérica de regímenes del bloque socialista significaría un desafío, ya que Norteamérica se vería obligada a consagrar grandes recursos en la defensa del área del Caribe en detrimento de la defensa de otras zonas. (*Informe Kissinger*, capítulo 6, "Problemas de seguridad en América Central".)

No resulta por lo tanto fortuito que las amenazas a Nicaragua se intensificaran desde entonces. Con motivo de las elecciones en El Salvador, Reagan se declararía una vez más dispuesto a "actuar decididamente en contra de los enemigos del mundo libre", condenándose a Nicaragua a la cual se calificaría de "dictadura comunista". (*Excelsior*: 20-marzo-1984.) A ello se sumaría el acoso al régimen sandinista por parte de la contrarrevolución, y el minado de los puertos nicaragüenses por parte de la CIA, todo

lo cual sería justificado por Reagan, quien señalaría que mientras Nicaragua continuase exportando la revolución, Estados Unidos trataría de “hacérselo inconveniente”. (*Excélsior*: 5-abril-1984.)

Resulta particularmente significativo que a pesar de todo esto, los negociadores de Contadora trataran de conjurar el nubarrón de pesimismo que se cernía sobre la región centroamericana mediante la insistencia de que el 30 de abril se presentaría un documento conteniendo las cláusulas que supuestamente los países centroamericanos habían decidido aprobar, lo cual estaba lejos de adecuarse a la realidad. Más que nunca la administración Reagan no estaba dispuesta a ceder, como lo atestiguan las insistentes declaraciones del mandatario norteamericano en el sentido de que Centroamérica era de vital importancia para Estados Unidos, y que se haría frente a la “agresión comunista por todos los medios posibles”. (*Excélsior*: 18-abril-1984.) Al discurso vendría aunado el inicio de maniobras militares en el Golfo de México, y a todo ello la decisión conjunta de los cancilleres de Costa Rica, Honduras y El Salvador de expresar sus objeciones a Contadora, la víspera de la presentación del Acta.

Por alguna razón, el mensaje de Reagan, de por sí muy claro, continuó siendo desoído en los meses siguientes, presentándose nuevamente como obstáculo insalvable cuando se afirmó que los países centroamericanos estaban decididos a firmar el Acta de Contadora. El 24 de septiembre Washington manifestó sus reservas al documento, al cual por otra parte Nicaragua había decidido adherirse incondicionalmente para evitar ser utilizada por Reagan como obstáculo en la negociación. (*Excélsior*: 27-septiembre-1984.) A principios de octubre Reagan rechazaba oficialmente el Acta de Paz, presionando a sus aliados centroamericanos para no firmarla, por considerar que el documento era “insuficiente en su alcance” para lograr la paz en Centroamérica. A su juicio el documento de Contadora carecía de especificidad, particularmente en algunos aspectos relacionados con el control de armamentos, el nombramiento de verificadores, la reducción de asesores y otros aspectos. Pese a ello, la principal objeción de Reagan era que el documento no censuraba expresamente a los sandinistas. (*Excélsior*: 2-octubre-1984.)

A partir de entonces el proceso negociador del Grupo comenzó a desmoronarse. Honduras, El Salvador y Costa Rica condicionarían la firma del documento a “algunos ajustes formales”, los cuales en realidad eran más que eso, al tiempo que la administración Reagan anunciaba que su apoyo al Acta estaba condicionado a cambios en el renglón de armamentos y seguridad así como al establecimiento de un calendario para asuntos vinculados a la seguridad regional. Todo parecía indicar que el proceso negociador entraba en un *impasse*, siendo que Costa Rica, Honduras y El Salvador, haciéndose eco de la postura de Reagan cuestionarían el documento “por no garantizar el retorno de la Revolución sandinista a su proyección original”. (*Excélsior*: 4-octubre-1984.)

La reelección de Reagan con un triunfo arrollador sobre su contrincante demócrata cerró por otra parte la posibilidad de un cambio significativo en materia de política exterior hacia Centroamérica. Si bien los sectores liberales continuarían rechazando la participación de la CIA y la guerra encubierta contra Nicaragua, la Nueva Derecha impondría como condición de su apoyo una política dura en contra de todo aquello considerado como una amenaza comunista. Nicaragua liderada por los sandinistas no dejaría por lo tanto de ser considerada como una amenaza, la cual era preciso eliminar bien sea mediante el apoyo diplomático o bien mediante la fuerza.

El paso del tiempo ha demostrado que la buena voluntad no basta y que la supuesta adhesión al principio pacificador no ha sido suficiente. Mientras el postulado del cual parte la administración Reagan no varíe, esto es, que la Unión Soviética esté decidida a hacer de Centroamérica su zona de influencia, y que la existencia tanto de Cuba como de Nicaragua lo demuestren, difícilmente podrán darse pasos decisivos en la pacificación del área, máxime si se tiene en cuenta la influencia real que ejerce Estados Unidos sobre sus tradicionales aliados en la zona, en momentos de crisis como la actual.

BIBLIOGRAFÍA

- Black: (1982), "Central América: crisis in the Backyard", *New Left Review*, Londres, septiembre-octubre, núm. 135.
- Borón, Atilio: (1981), "La crisis norteamericana y la racionalidad neo-conservadora", *Cuadernos Semestrales. Estados Unidos. Perspectiva Latinoamericana*, México, CIDE, primer semestre.
- Finger, S. Maxwell : (1983-84), "The Reagan Kirkpatrick policies and the United Nations", *Foreign Affairs*, Washington, invierno, vol. 62, núm. 2.
- Mike, Davis: (1981), "The new raight road to power", *New Left Review*, Londres, julio-agosto, núm. 128.
- Smith, Wayne S.: (1982), "Dateline Havana: myopic diplomacy", *Foreign policy*, Washington, otoño, núm. 18.
- Wolfe, Alan: (1981), "Sociology liberalism and the radical right", *New Left Review*, Londres, julio-agosto, núm. 128.

Periódicos

Los Angeles Times, varios números.

New York Times, varios números.

Manchester Guardian/Le Monde, varios números.

Miami Herald.

Newsweek.

Financial Times.

Journal of Commerce.

Excelsior, varios números.

Washington Post, varios números.

Wall Street Journal.